

do de Distrito de Zacatecas por el C. Feliciano Mireles, en representacion de su padre el C. Roque del mismo apellido, contra la Administracion de rentas de Pinos, que por acuerdo del Gobierno de ese Estado, ha cobrado y embargado al peticionario por el valor de unos terrenos llamados de Castellanos, que le fueron adjudicados, alegando Mireles, que la orden referida invade las atribuciones de las autoridades de la Federacion, violando la fraccion 4ª del artículo 72 del Pacto federal, así como la ley de 22 de Julio de 1868. Vistas las constancias de autos y considerando: que la disposicion constitucional citada por el quejoso ordena que el denuncie, adjudicacion y pago de los terrenos baldios, corresponde á las autoridades de la Federacion; que la orden dictada por el C. Santos Degollado fecha 26 de Octubre de 1858, en que funda sus procedimientos el Gobierno de Zacatecas, importa una escepcion por el estado que guardaba á esas fechas la República por causa de la guerra, como lo expresa terminantemente la referida autorizacion; que habiendo cesado esa situacion anormal, la República ha vuelto al pleno goce de las garantías otorgadas por la Constitucion, se declara: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia que se revisa, cuya parte resolutiva es como sigue: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Roque Mireles, contra los procedimientos de la Administracion de rentas de Pinos, que por acuerdo del Supremo Gobierno del Estado ha cobrado el precio de los terrenos baldios de Castellanos que le fueron adjudicados, embargandolo por lo que quedaba adeudando del precio el referido Mireles, por haber invadido el Supremo Gobierno del Estado con sus ordenes y acuerdos, las facultades de las autoridades de la Federacion.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos

y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordáz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Juan A. Mateos*, secretario

Es copia que certifico México, Mayo 12 de 1878.—*Lic. Enrique Lanza*, oficial mayor.

AMPARO

promovido ante el juzgado 2º de Distrito de México, por Guadalupe Arteaga, contra su consignacion al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el C. Guadalupe Arteaga, contra la determinacion de la Comandancia militar del Distrito federal que lo destinó al servicio de las armas en el primer cuerpo de caballeria, el 8 de Mayo próximo pasado, supuesto el estado de este juicio que es el de alegar, y haciéndolo en la forma prescrita por la ley, dice: que la justificacion de V. se ha de servir declarar en definitiva, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Guadalupe Arteaga, contra la providencia de que se queja por haberse violado con ella en dicho C. las garantías que otorga el artículo 5º de la Constitucion, en vista de las razones que paso brevemente á exponer.

Es un hecho enteramente comprobado por el informe que ha rendido la autoridad responsable del acto reclamado, que el dia 8 de Mayo del año pasado fué con.

signado el referido Arteaga al servicio de las armas contra su voluntad en el primer cuerpo de caballería, en cuya fecha no estaban suspensas las garantías individuales, supuesto que había espirado el término durante el cual quedaron suspendidas conforme al decreto de 2 de Diciembre del año anterior, y por consiguiente la determinación de que se queja es atentatoria al precepto Constitucional que garantiza la libertad del hombre. Así es, que siendo el presente caso absolutamente claro, no hay mas que deducir la consecuencia precisa que se desprende de las premisas que constituyen los hechos y aplicar la suprema ley violada ó infringida en la persona de Guadalupe Arteaga. Por lo mismo, el suscrito Promotor reproduce en conclusion la petición que tiene hecha al principio, sobre que el C. Juez se sirva declarar: que la Justicia federal ampara y protege al ya referido C. Arteaga, contra la disposición de la autoridad militar que lo ha privado del goce de su libertad, por ser de rigurosa justicia que se le devuelva.

México, Febrero 17 de 1873.—*Moctezuma.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

México, Mayo 18 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe Arteaga á virtud de reputar violada en su persona con su consignación al servicio militar, la garantía que otorga el artículo 5º constitucional. Visto el informe de la autoridad responsable; lo pedido por la parte fiscal y demas que verse convino, y Considerando: que segun consta del informe de la Comandancia, el quejoso fué consignado en 8 de Mayo del año próximo pasado, es decir, en la fecha en que no se hallaba en suspenso la garantía que se invoca; por tales razones y de conformidad con el pedimento fiscal, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Gua-

dalupe Arteaga, por haberse violado con su consignación al servicio militar, la garantía que otorga el art. 5º de la Constitución.

Hágase saber; remítase copia de este fallo al Semanario Judicial y Diario Oficial, y elévense los autos previa citación fiscal á la Corte Suprema de Justicia. Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito, Lic. José María Canalizo.—*José María Canalizo.*—*Manuel M. de Chavero*, secretario,

Es copia. México, Marzo 26 de 1873.—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 19 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de esta Ciudad por Guadalupe Arteaga contra el comandante militar de México, por su consignación al servicio militar en el primer cuerpo de caballería permanente; y apareciendo en el expediente que se ha vulnerado en la persona del quejoso la garantía á que se refiere el artículo 5º de la Constitución federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la misma, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 18 del mes próximo pasado por el Juzgado 2º de Distrito de esta Ciudad, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Guadalupe Arteaga por haberse violado con su consignación al servicio militar la garantía que otorga el artículo 5º de la Constitución. Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan*

J. de la Garza.—José Arteaga.—P. Ordas.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Rumirez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 26 de 1873.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Puebla, por Antonio Serrano, contra su consignacion al servicio de las armas.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Abril 8 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Antonio Serrano contra el coronel del batallon número diez y nueve de línea, por haberlo aprehendido y destinado al servicio de las armas; el escrito de queja; lo manifestado por el Cefe del cuerpo como autoridad responsable; las pruebas rendidas; lo alegado; el parecer fiscal y cuanto mas que ha debido verse. Considerando: que el promovente ha hecho valer, que hallándose en el rancho del Pozo en el Distrito de Tetela de Ocampo, fué aprehendido por las fuerzas que mandaba el C. Coronel del diez y nueve de infantería, suponiéndolo ser uno de los que habian reveládose contra el Supremo gobierno, y destinado por lo mismo á servir en ese batallon, con cuyo procedimiento hayan violádose en su perjuicio las garantías que otorgan los artículos 4º, 5º, 13, 14 y 16 de la Constitucion: que ha probado plenamente que ha tenido lugar el hecho que motiva la queja, y que no es cierto que el quejoso haya sido de los que se pronunciaron en la Sierra: que al obligársele á servir en el ejército han violádose en su perjuicio las garantías que otorgan los artículos cons-

titucionales 5º y 16, pues los demas que se citan no tienen aplicacion en el caso. Por cuyas consideraciones, de conformidad al parecer fiscal, y en atencion á lo que se dispone por el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que la Justicia federal ampara y protege al C. Antonio Serrano por haber sido destinado al servicio de las armas, por el C. gefe del batallon número diez y nueve de infantería. Hágase saber y remítase el expediente á la Corte Suprema de Justicia para su revision, sacándose previamente copias de esta sentencia para la redaccion del Periódico Oficial del Estado y Semanario Judicial de la Federacion para su publicacion. El C. Juez de Distrito del Estado definitivamente juzgando, lo proveyó mandó y firmó.—*Antonio Rivero. Ante mí.—Antonio García Moqueira.*

Es copia que certifico; y se saca para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion, segun está mandado. Puebla, Abril 9 de 1873.—*Antonio G. Moqueira, secretario.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 19 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 20 de Noviembre de 1872, promovió en la ciudad de Puebla, ante el juzgado de Distrito del Estado del mismo nombre, Antonio Serrano, contra la disposicion del Coronel del batallon número 19 de línea perteneciente al ejército nacional, por la cual fué aprehendido y consignado al servicio militar, violándose las garantías que otorgan los artículos 4º, 5º, 13 y 16 de la Constitucion federal. Vistas las constancias de autos y considerando: que el quejoso ha probado que sirve como soldado forzado en el ejército, sin que resulte de lo actuado alguna razon legal por la cual se justifique esa situacion; y que en tal concepto procede en derecho la legalidad de su